

ÍNDICE AI: ACT 50/06/99/s

EMBARGADO HASTA LAS 03:00 GMT DEL 12 DE AGOSTO DE 1999

Estados Unidos/Filipinas: Macabro ejemplo del líder mundial en el uso de la inyección letal

Los ocho homicidios que está previsto realizar en Estados Unidos y Filipinas durante los próximos siete días tiene en común un impulso macabro que supera la crueldad calculada de las ejecuciones y su afrenta a la dignidad humana, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

«Las ejecuciones realizadas en Filipinas llevan la marca de Estados Unidos, líder mundial en la aplicación de la inyección letal a presos —ha añadido la organización—. Estamos siendo testigos de los macabros frutos de una “relación de trabajo” internacional entre un veterano y un novato».

Según informes, en 1997 y de conformidad con el plan de su gobierno de reanudar las ejecuciones tras un intervalo de veinte años, el entonces jefe del sistema penitenciario filipino, Vicente Vinarao, visitó varios estados de Estados Unidos para aprender de su experiencia con la inyección letal. Después de presenciar una ejecución en Texas, dijo que probablemente Filipinas enviaría a sus verdugos a Estados Unidos para que recibieran formación.

Ha habido también informes no confirmados según los cuales las autoridades filipinas podrían haber importado material para la aplicación de la inyección letal de Estados Unidos. De todos modos, aunque no hayan adquirido la tecnología, lo que sí han hecho ha sido copiar la técnica.

Cuatro hombres podrían ser ejecutados por inyección letal en Filipinas entre el 16 y el 18 de agosto. En Estados Unidos fueron ejecutados cuatro presos la semana pasada, y está previsto que el 18 de agosto cuatro personas más sean víctimas de la inyección letal en Texas y Virginia.

«Al recurrir cada vez más a los homicidios judiciales, a pesar de la tendencia mundial abolir la pena de muerte y a menudo violando normas internacionales, Estados Unidos está dando un pésimo ejemplo al resto del mundo», ha explicado Amnistía Internacional.

«El simple hecho de enseñar a otro país el “mejor” modo de ejecutar a sus presos priva de todo su valor a la pretensión de Estados Unidos de ser el principal defensor de los derechos humanos en el mundo».

La sustitución de la electrocución por la inyección letal como método de ejecución en Filipinas la decidió el Congreso en febrero de 1996. Desde que el país reanudó las ejecuciones en febrero de 1999 con el homicidio de Leo Echegaray se ha quitado la vida a cinco hombres. Uno de ellos, Eduardo Agbayani, fue ejecutado en junio por la violación de su hija, quién había pedido que le perdonaran la vida. El presidente Estrada decidió concederle el indulto, pero la llamada telefónica a la cámara de ejecución llegó demasiado tarde.

«Lamentamos muchísimo que el presidente Estrada no hiciera uso del cruel final de este caso para eliminar en Filipinas la práctica del homicidio a manos del Estado —ha declarado Amnistía Internacional—. En vez de hacerlo va a permitir que en los próximos días el número de víctimas de homicidio judicial ascienda en su país a casi el doble».

Al menos una persona es condenada a muerte cada día en Filipinas, donde la pena capital es preceptiva para un elevado número de delitos. Este hecho se produce a pesar de la existencia de

persistentes informes sobre acusados en causas criminales que han sido sometidos a tortura antes del juicio para obligarlos a firmar una confesión.

Las autoridades estadounidenses y filipinas continúan recibiendo avalanchas de peticiones de indulto de todo el mundo. Aunque exista una relación oficial entre las ejecuciones llevadas a cabo en Filipinas y en Estados Unidos, hay también lazos entre las comunidades abolicionistas de ambos países.

En 1998, varios miembros de *Journey of Hope* (El Camino de la Esperanza), organización estadounidense de familiares de víctimas de asesinato y de condenados a muerte, viajaron a Filipinas para hacer una campaña en contra de la reanudación de las ejecuciones. Entre ellos se encontraba Lois Robison, cuyo hijo, Larry, deberá ser ejecutado en Texas el 17 de agosto.

«Como toda ejecución, la de Larry Robison no servirá más que para crear más víctimas —ha manifestado Amnistía Internacional—. En vez de ofrecer soluciones constructivas a los delitos violentos, su ejecución será la brutal conclusión del fracaso de las medidas de la delincuencia».

A Larry Robison le diagnosticaron esquizofrenia paranoica tres años antes de su crimen, pero los servicios de salud mental de Texas le dijeron reiteradamente que no tenían recursos suficientes para ocuparse de él a menos que se volviera violento.

«Texas no ha vacilado, en cambio, en dedicar inmensos recursos a su brutal respuesta al crimen de Larry Robison —ha añadido Amnistía Internacional—. Cuando el condenado sea conducido a la cámara de ejecución, al estado le habrá costado más de dos millones de dólares llevarle hasta allí».

Larry Robison será la persona número 98 ejecutada en Texas desde que es gobernador del estado George W. Bush. Está pretende convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y con tal fin está realizando en la actualidad una campaña en la que enarbola la bandera del «conservadurismo compasivo».

«La ejecución inminente de Larry Robison ofrece al gobernador Bush la oportunidad de comenzar a demostrar que la compasión y el respeto de las normas internacionales puede llegar a ser todavía una característica de su liderazgo», ha señalado Amnistía Internacional.

La relación entre Estados Unidos y Filipinas por cuestiones relacionadas con la pena de muerte ha tenido otro aspecto trágico. Alvaro Calambro es una de las 63 personas ejecutadas en Estados Unidos en lo que va de año. Ciudadano filipino, fue ejecutado a pesar no sólo de estar en el límite del retraso mental y de que se había violado su derecho al acceso consular, sino también haciendo caso omiso de las protestas del gobierno filipino.

«La aplicación de la pena de muerte en Filipinas no servirá más que para menoscabar los esfuerzos del gobierno por conseguir el indulto de sus ciudadanos condenados a muerte en otros países», ha manifestado Amnistía Internacional.

«El marco de normas internacionales construido a lo largo de los últimos 50 años es el resultado de la cooperación positiva entre los gobiernos. Instamos a Filipinas y a Estados Unidos a esforzarse juntos por hacer honor a estos acuerdos y sumarse al creciente número de países —más de la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas ya— que han vuelto la espalda a la pena de muerte».

Si desean más información, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, (tel.: 44 171 413 5566) o visiten nuestro sitio web (<http://www.amnesty.org>).